



36

INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA
55/95. DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO
232/82 PROMOVIDO POR GRACIELA LEMAS
MORENO Y COAGRAVIADOS.

PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: LIC. LUZ CUETO MARTINEZ.

Vo. Bo. México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de enero de mil novecientos noventa y siete.

V I S T O S, Y,

R E S U L T A N D O :

Cotejó:
Rojas

PRIMERO.- Por escrito presentado el catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, ante el juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, (actualmente juez Quinto de Distrito) con residencia en la ciudad de Nogales, Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez Jr. Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda, Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira Bárcenas, por su propio derecho, ocurrieron demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES: Los presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Reforma

Agraria, ambos con domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal; delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, con domicilio en Hermosillo, Edificio Cremi, esquina que forman las Calles Rosales y Plutarco Elías Calles; y el ingeniero comisionado Luis Felipe Burgos Madrid, quien también puede ser notificado en dicho domicilio.--- ACTOS RECLAMADOS: De las dos primeras autoridades señaladas como responsables se reclama la desposesión (sic) que se pretende realizar en los predios de la exclusiva propiedad y posesión de los quejosos que más adelante se refieren ubicados en la Colonia Agrícola "El Ocuca" y por ende dentro del Distrito de Colonización Agrícola y Ganadero conocido con ese nombre y ubicado en el Municipio de Trincheras, Sonora; se reclama igualmente la afectación ilegal que se hace de tales predios, según resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de marzo del presente año, sin tomar en cuenta que se trata de pequeñas propiedades, ubicadas dentro de la zona de colonización y que fue colonizada de acuerdo con la ley y que por ende se trata de pequeñas propiedades inafectables establecidas en la propia Ley Federal de Colonización y reconocidas además por la misma autoridad agraria por acuerdo fechado en Cuernavaca el catorce de enero de mil novecientos treinta y nueve que decretó la inafectabilidad permanente de los terrenos de la colonia "El Ocuca" y además, robustecido este reconocimiento con expedición de certificados de inafectabilidad que más adelante se refieren.--- Del resto de las autoridades señaladas como responsables, se reclaman las consecuencias de dicha resolución, y en especial, de todas ellas, el desconocimiento implícito que hacen de la inafectabilidad de los predios, sin



ningún procedimiento previo y sin respetar la garantía de audiencia, y la desposesión (sic) que se pretende llevar a cabo con motivo de la ejecución presidencial de mérito.--- Por lo que respecta a los quejosos Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas, se reclama la ejecución indebida de dicha resolución pues se les pretende afectar en terrenos de agostadero de su exclusiva propiedad y posesión, sin que la resolución en sí lo haya ordenado ya que afecta terrenos totalmente diferentes y de otro propietario, y sin embargo en la propia ejecución y en el plano proyecto se les pretende afectar y desposeer de sus terrenos, independientemente que, por estar comprendidos en el distrito de colonización "El Ocuca", tales predios son inafectables por ley.--- 5.- Garantías constitucionales violadas: Las consignadas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales.--- 6.- Fecha de NA Notificación del acto reclamado: Hasta la fecha no se nos ha SA Notificado pero el comisionado ingeniero Luis Felipe Burgos Madrid, nos ha dejado citatorio en el que nos informa de la existencia del mismo, oficio que es de fecha diez de los corrientes y entregado el día de ayer".

SEGUNDO.- La parte quejosa indicó como garantías infringidas en su perjuicio, las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal; señaló como tercero perjudicado al Ejido Pueblo Nuevo, hoy "Nuevo Ocuca" Municipio de Trincheras, Estado de Sinaloa; y expresó como antecedentes del asunto los siguientes:

"1.- Todos y cada uno de los quejosos son propietarios y legítimos poseedores de los siguientes predios:--- a).- Graciela Lemas Moreno, de los lotes [REDACTED] y [REDACTED] de la Colonia Agrícola "El Ocuca", con superficie de 40-00-00 hectáreas cada uno de ellos, que

INC. DE INEJ. 55/95.

adquirió mediante escritura pública número cinco mil trescientos dieciséis, de fecha treinta de enero de mil novecientos setenta, otorgada ante la fe del Notario Público número Ocho de Magdalena, Sonora, Don Ramiro Ortíz O., e inscrita bajo el número ocho mil quinientos ochenta y cinco del volumen XXI de la Sección I del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Caborca, Sonora.--- b).- Agustín Rodríguez Jr. entre otros bienes del lote número [REDACTED] con superficie de 40-00-00 hectáreas y que adquirió mediante escritura pública número mil quinientos cuarenta, otorgada ante el mismo notario el día veinticinco de mayo de mil quinientos cincuenta y seis y cuyo primer testimonio se encuentra inscrito bajo el número tres mil trescientos trece, volumen XI de la Sección I del mismo Registro.--- c).- Domingo Pesqueira Bárcenas, de los lotes números [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] con superficie de 40-00-00 hectáreas, 10-00-00 hectáreas, 43-75-00 hectáreas y 40-00-00 hectáreas respectivamente que adquirió mediante escritura pública número cinco mil seiscientos diecinueve, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y uno, otorgada ante el mismo notario que las anteriores e inscrita bajo el número nueve mil doscientos setenta y nueve, volumen XXI de la Sección I del mismo Registro; y a través de escritura privada de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y uno, ratificada ante el propio Notario e inscrita debidamente en el Registro Público de Caborca, Sonora.--- d).- Margarita Carlos Castañeda, de los lotes números [REDACTED] y [REDACTED] del fraccionamiento de la Colonia "El Ocuca", con superficie de 31-90-00 hectáreas y 38-50-00 hectáreas, respectivamente que adquirió mediante escritura pública número cuatro mil



- 5 -

INC. DE INEJ. 55/95.

quinientos dieciséis, de fecha treinta de agosto de mil novecientos sesenta y siete, otorgada ante el propio Notario y cuyo primer testimonio se inscribió bajo el número seis mil novecientos cuatro, volumen XIX de la Sección I del propio Registro.--- Estos lotes de terreno cuentan además con certificación de inafectabilidad en cuanto toca al lote número [REDACTED] expedido a favor de Armida Hopkins de García, causante de Margarita Carlos Castañeda y acuerdo de inafectabilidad respecto del lote número [REDACTED], publicado en el Diario Oficial de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos setenta, cuando el lote todavía era propiedad de Rubén Hopkins Martínez (se acompañan tales documentos).--- e).- Francisco Irastorza Lavín, es dueño del lote número [REDACTED], ubicado en la propia colonia "El Ocuca" que adquirió mediante escritura pública número novecientos cincuenta y ocho, de fecha catorce de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho, otorgada ante el señor Jesús Pompa Juez de Primera Instancia en funciones de Notario Público y que se inscribió bajo el número mil ochocientos noventa y nueve, volumen VIII de la Sección I del Registro Público de la Propiedad de Altar. Este lote cuenta con certificado de inafectabilidad número [REDACTED] que adjunto me permito acompañar.--- Además es dueño de una fracción de terreno de agostadero con superficie original de 476-77-35 hectáreas que adquirió mediante escrituras públicas números tres mil trescientos treinta y uno y tres mil trescientos treinta y dos, de fechas veintiocho y veinticinco de agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro, otorgadas ante el Notario Público número Seis, licenciado Arsenio Espinoza, e inscritas bajo los números dos mil setecientos veintiuno y dos mil setecientos

dieciséis, volumen X de la Sección I del propio Registro y a través de escritura pública número dos mil ochenta y siete, de fecha diecinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve otorgada ante el Notario Público número ocho, Don Ramiro Ortéz O. e inscrita bajo el número tres mil setecientos nueve, volumen XII de la Sección I del propio Registro.--- De esta fracción el señor Irastorza Lavín ha enajenado además 27-83-97 hectáreas a Irma H. de Garmendia y 93-56-73 hectáreas a Rosalía Dávila de Moreno.--- Por último en escritura pública dos mil doscientos quince, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, adquirió una superficie de 346-10-54 hectáreas de agostadero cuyo primer testimonio se inscribió bajo el número tres mil setecientos noventa y seis, volumen XIII, de la Sección I del propio Registro.--- f) Domingo Pesqueira Bárcenas, es dueño también de una fracción de terreno rústico de agostadero con superficie de 1948-77-71 hectáreas que adquirió el veintiocho de mayo de mil novecientos setenta y uno, según escritura pública número cinco mil seiscientos sesenta y siete, otorgada ante el Notario Público número ocho Don Ramiro Ortéz O. y cuyo primer testimonio se inscribió bajo el número nueve mil seiscientos diez, volumen XXI de la Sección I del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Caborca, Sonora.--- g).- Heriberto Pesqueira Bárcenas, es dueño también de una fracción de terreno de agostadero con superficie de 3062-30-00 hectáreas que adquirió mediante escritura pública número cinco mil seiscientos dieciocho, de fecha dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y uno, otorgada ante el mismo Notario e inscrita bajo el número nueve mil doscientos setenta y ocho, volumen XXI de la Sección I del propio registro.--- 2.- Todos los predios arriba descritos se encuentran enclavados en la



Colonia "El Ocuca", cuya colonización se llevó a cabo según oficio número 403.52-10350 de veintisiete de julio de mil novecientos treinta y siete, firmada directamente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y autorización de la extinta Comisión Nacional de Colonización con la intervención del gobierno del Estado y la Secretaría de Agricultura y Ganadería se declaró el quince de octubre de mil novecientos treinta y ocho, que los terrenos en cuestión reunían las características legales para ser colonizados con fines agrícolas y ganaderos y el Presidente de la República, en acuerdo fechado en Cuernavaca el catorce de enero de mil novecientos treinta y nueve, decretó la inafectabilidad permanente de los terrenos de dicha Colonia "El Ocuca", Municipio de Trincheras.--- Lo anterior ha sido reconocido por todas las autoridades agrarias, entre otras las que se acompañan que es el mandamiento de siete de agosto de mil novecientos sesenta y siete dictada por la Comisión Agraria Mixta, en cuya hoja dos, W párrafo se transcriben las fechas y los acuerdos ya mencionados; así como la Dirección de Inafectabilidad Ganadera reconoce que estos terrenos de la Colonia "Ocuca" son inafectables por ley. Además se acompañan el contrato celebrado para colonizar el predio "El Ocuca" y diversa documentación que acredita la inafectabilidad por ley de estos terrenos.--- 3.- Independientemente de lo anterior y como es el caso de los lotes propiedad de Margarita Carlos Castañeda y una fracción de Francisco Irastorza Lavín tienen certificados de inafectabilidad adicionales.--- Por consiguiente estas propiedades están ubicadas en zonas señaladas como de colonización y se adquirieron al amparo conforme a la Ley Federal de Colonización y la antigua Ley de Colonización, cuentan con inafectabilidad permanente según

TE DE
NACION
SALA
---008

acuerdo de catorce de enero de mil novecientos treinta y nueve y el sólo hecho de habérseles expedido título de acuerdo con dicha ley y con contratos celebrados a través del gobierno del Estado, deben considerarse de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Colonización y de acuerdo con la jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como terrenos inafectables.--- 4.- Sin embargo y con suma sorpresa nos hemos enterado que con fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno se dictó una resolución presidencial que se publicó en el Diario Oficial de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, por virtud de la cual se dotó al poblado denominado "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", del Municipio de Trincheras, de una superficie de 5015-20-00 hectáreas las cuales se toman o deberían tomarse de los lotes y terrenos que se refieren por la propia resolución que adjunto se acompaña, específicamente de los lotes [REDACTED] y [REDACTED] de Graciela Lemas Moreno, cuya superficie real es de 40-00-00 hectáreas y no 55-00-00 como dice la resolución; de Agustín Rodríguez, lote número [REDACTED] cuya superficie real es de 40-00-00 hectáreas y no de 37-20-00 hectáreas como también se afirma; de los lotes [REDACTED] y [REDACTED] propiedad del suscrito Domingo Pesqueira Bárcenas, se afirma que se toman con superficie de 45-00-00 hectáreas cada uno de ellos siendo que su superficie es diversa, al igual que los lotes de Margarita Carlos Castañeda cuya superficie real son 31-90-00 y 38-50-00 hectáreas. De los lotes de Francisco Irastorza Lavín aparentemente se toma el lote agrícola de 56-55-53 hectáreas, que cuenta incluso con certificado de inafectabilidad y supuestamente 608-20-00 hectáreas de agostadero y de Oscar Pesqueira se toman 4000-00-00 hectáreas,



INC. DE INEJ. 55/95.

es decir se deberían tomar 4000-00-00 hectáreas e indebidamente se pretende afectar a personas no mencionadas en la propia resolución y terrenos no comprendidos como lo son los de los quejosos Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas.---

5.- La dotación de mérito resulta ilegal porque se trata de pequeñas propiedades inafectables en explotación no sólo por ser predios ubicados en zona de colonización titulados al amparo de la ley referida, sino porque se trata de propiedades que no exceden de los límites que la ley señala para ser consideradas como inafectables, independientemente de que se reconoció su inafectabilidad permanente en acuerdo presidencial de catorce de enero de mil novecientos treinta y nueve y alguno de dichos lotes se robustece además con certificado de inafectabilidad; por lo tanto al afectar estas pequeñas propiedades, al no existir procedimiento previo para declarar o nulificar la inafectabilidad, dicho procedimiento resultó ilegal y la resolución en sí es violatoria de las garantías consignadas en los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, independientemente de que existe indebida ejecución en lo que respecta a los predios de agostadero de Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas, violándose también estos preceptos de conformidad con los siguientes:"

Asimismo, la quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los que no se transcriben por no ser necesario para la resolución de este asunto.

TERCERO.- El juez de Distrito señalado, por acuerdo de quince de julio de mil novecientos ochenta y dos, admitió la demanda de amparo, registrándola con el número 232/82. Tramitado el juicio, el seis de mayo de mil novecientos ochenta y tres el juez dictó sentencia, por la que concedió el amparo a los quejosos.

Inconforme con la sentencia señalada, el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, por el Presidente de la República y por el secretario de la Reforma Agraria, en ausencia de éste, interpuso el recurso de revisión.

De dicho recurso correspondió conocer a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, por resolución de diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y seis, dictada en el toca 3619/85, por unanimidad de cuatro votos, decretó la reposición del procedimiento, en virtud de que no se advertía de las constancias de autos, la notificación de la sentencia recurrida al ejido tercero perjudicado y para el efecto de que se proveyera respecto de la notificación personal a fin de que el tercero, de estimarlo pertinente, interpusiera el recurso de revisión.

El tercero perjudicado interpuso el recurso de revisión del que, finalmente, correspondió conocer al Segundo Tribunal del Quinto Circuito, el que, por resolución de veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, dictada en el toca 3/88, revocó la resolución recurrida y ordenó reponer el procedimiento, en virtud de que no existió constancia de que se hubiera notificado al tercero la fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas seiscientos ochenta y cuatro a seiscientos noventa del expediente, Tomo I).

Finalmente, el veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, se verificó la audiencia constitucional, en la que se dictó la sentencia que se terminó de engrosar el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, y que concluyó con el siguiente punto resolutivo:

"PRIMERO.- SE CONCEDE a Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos



INC. DE INEJ. 55/95.

Castañeda, Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, respecto de los actos que reclaman del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de la Reforma Agraria con residencia en México, Distrito Federal, Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado, ingeniero Comisionado Luis Felipe Burgos Madrid, con residencia en Hermosillo, Sonora, por las razones expuestas en el considerando TERCERO de esta resolución".

La referida sentencia se apoya en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer del presente juicio de garantías acorde a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 114, fracción IV de la Ley de Amparo.---

CORTE DE LA NACION.
A SALA DE ACUERDOS.

SEGUNDO.- Los quejosos expresaron los conceptos de violación que aquí se tienen por reproducidos en los que esencialmente adujeron que sin haber sido oídos ni vencidos se les pretende privar de sus propiedades y posesiones que tienen respecto de los inmuebles que resultaron afectados con la resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, que dotó de tierras al ejido "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", Municipio de Trincheras, Estado de Sonora y su ejecución.---

TERCERO.- Los quejosos en síntesis vienen reclamando la resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, mediante la que se les pretende desposeer de los predios de su exclusiva propiedad y que quedaron establecidos en el escrito inicial de demanda, no obstante que dichos predios se encuentran ubicados dentro de

la zona de colonización de los Municipios de Altar y Caborca de esta entidad federativa; manifestando Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, que la citada resolución presidencial los afecta en los predios que han señalado, no obstante que estos son inafectables por estar dentro del distrito de colonización ya citado; y por otra parte, Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas reclaman la indebida ejecución de la precitada resolución presidencial, ya que se les pretende desposeer de los terrenos que también se encuentran precisados en su escrito de demanda, sin que tales predios estén incluidos dentro de los terrenos afectables por dicha resolución presidencial; expresando los quejosos que no fueron oídos dentro del procedimiento agrario que culminó con la resolución que hoy vienen combatiendo. Ahora bien, a fojas doscientas cuarenta y uno del expediente, obra copia certificada del Diario Oficial de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve en el que aparece el acuerdo por el cual se declaró de utilidad pública la colonización de los terrenos ubicados en los Municipios de Altar y Caborca, Sonora, en cuyo considerando PRIMERO se establecen los límites de dicho Distrito de Colonización a foja doscientos cuarenta y tres obra también copia del Diario Oficial de la Federación de fecha dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y uno el cual contiene el acuerdo mediante el que se amplía la zona colonizable del Estado de Sonora, ampliando a dicho distrito de colonización entre otros, el Municipio de Trincheras, Sonora, terrenos estos que resultan ser inafectables de acuerdo con el artículo 6° de la Ley Federal de Colonización y aunque si bien es cierto, que dicha Ley Federal de



Colonización fue derogada por Decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, también lo es, que de los artículos 2o. y 5o. transitorios de dicho Decreto, se desprende que tal derogación no afecta a las colonias ya autorizadas; y en esas condiciones, subsiste la inafectabilidad de los predios objeto de litis, puesto que ya se encontraban debidamente colonizados en la fecha en que se derogó la mencionada Ley Federal de Colonización, según se desprende del oficio remitido por el director de la Secretaría de Agricultura con fecha siete de noviembre de mil novecientos cuarenta en el cual comunica que ya se encuentra firmado el contrato-autorización para colonizar el predio "El Ocuca" ubicado en los Municipios de Tubutama y Trincheras, Sonora, el cual obra a fojas doscientos cincuenta y cuatro; asimismo de los diversos contratos celebrados por el gobernador constitucional de esta entidad federativa con los propietarios originarios de los predios cuestionados, contratos éstos que aparecen agregados a los autos; y por otra parte, con la pericial rendida por el [REDACTED] en su carácter de perito oficial de este Tribunal, se acredita que los terrenos objeto de litis se encuentran ubicados dentro del Distrito de Colonización antes citado. Establecido lo anterior, es de precisarse que los quejosos Graciela Lemas Moreno es propietaria de los lotes [REDACTED] y [REDACTED]; Agustín Rodríguez del lote número [REDACTED]; Domingo Pesqueira Bárcenas de los lotes [REDACTED] y [REDACTED]; y [REDACTED]; Margarita Carlos Castañeda de los lotes [REDACTED] y [REDACTED] y Francisco Irastorza Lavín del lote número [REDACTED] y además de una fracción de terreno de aproximadamente 355-00-00 hectáreas y de otra de 348-10-54 hectáreas todos

ubicados en la Colonia "Ocuca", Municipio de Trincheras, Sonora; y quienes aducen que se les pretende desposeer de dichos predios como resultado de la afectación de que fueron objeto por la resolución presidencial que vienen reclamando, sin haber sido oídos en el procedimiento agrario que culminó con dicha resolución; ahora bien, a fojas diecinueve de los autos se encuentra agregada copia del Diario Oficial de fecha cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, en el cual aparece la resolución presidencial que se combate y después de un análisis minucioso de la misma, no se advierte que en el procedimiento agrario que culminó con dicha resolución se haya integrado con las formalidades legales debidas y se hubiere otorgado a los quejosos la oportunidad de ser oídos y de haber aportado las pruebas a que hubieren tenido derecho, para que así se hubiere cumplido con la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional, prueba esta que era a cargo de las citadas autoridades agrarias, para desvirtuar la violación a tal mandamiento constitucional; por lo que al no haberlo hecho así, es dable concluir, que la resolución presidencial que hoy se reclama sí viola en perjuicio de los quejosos Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, los derechos públicos individuales consagrados por los artículos 14 y 16 y así como los de propiedad previstos por el artículo 27 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose por tanto conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan, para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente el procedimiento que culminó con la resolución presidencial que hoy se reclama, por lo que a los quejosos se refiere, sin perjuicio de que lo integren nuevamente y en el



cual previas las formalidades legales respectivas se otorguen a los quejosos el derecho de audiencia y puedan desahogar las pruebas a que crean tener derecho con relación a la propiedad y posesión que tienen sobre los predios objeto de litis.- No es óbice para arribar a la conclusión que precede, el hecho de que los quejosos hayan formulado alegatos y ofrecido pruebas dentro del procedimiento, toda vez que en ningún momento fueron tomadas en cuenta al dictarse la resolución que se impugna, no obstante, haber exhibido los documentos con los que pretendían acreditar su propiedad y posesión. En apoyo de lo anterior, es de citarse la Jurisprudencia número doscientos sesenta y siete, visible a fojas cuatrocientos setenta y nueve del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "AUDIENCIA GARANTÍA DE CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- La afirmación del quejoso en contrario de sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que la Nación, a su vez, integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama". Por otra parte, los quejosos Domingo Pasqueira Bárcenas y Heriberto Pasqueira Bárcenas, también vienen reclamando la resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno por la indebida ejecución, sobre los predios de su exclusiva propiedad y posesión que tienen una superficie respectivamente de 1948-77-71 hectáreas y 3062-30-00 hectáreas ubicados en la Colonia "Ocuca" del Municipio de Trincheras, Sonora, no obstante que tales predios, no son de los que resultaron afectados por la citada resolución presidencial como se desprende de su lectura y se corrobora con la prueba pericial a cargo del ingeniero [REDACTED] en su carácter de perito oficial de este tribunal y mediante la que se acredita

que los predios propiedad y posesión de los quejosos que nos ocupan no son de los afectados por la resolución presidencial que hoy se combate y al contestar el punto número nueve del cuestionario en su apartado cuarto, precisa que al ejecutarse dicha resolución presidencial, si resultan afectados los predios de los quejosos ya citados; y en esas condiciones, es dable concluir que la ejecución de la resolución presidencial que se reclama si resulta indebida y por tanto violatoria de los derechos públicos individuales consagrados por los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, debiéndose por tanto conceder a los quejosos Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistentes los actos de ejecución que hayan llevado a cabo con motivo de la mencionada resolución presidencial única y exclusivamente por lo que a los quejosos y a los predios antes citados se refiere. ^{ANEX} ^{A. DE} ^{TA} ^{LA} En apoyo de lo anterior es de citarse la tesis Jurisprudencial número mil seiscientos treinta y seis localizable a fojas dos mil seiscientos cuarenta y ocho del Apéndice antes citado, que a la letra dice: "RESOLUCIONES PRESIDENCIALES, EJECUCION INDEBIDA. POSESION CALIFICADA INNECESARIA. Cuando se impugna la ejecución de una resolución presidencial por considerarla indebida, el quejoso no tiene que demostrar si llena o no los requisitos de la posesión a que se refiere el artículo sesenta y seis del Código Agrario (artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria), pues la litis se constriñe a determinar si el fallo presidencial, que en el caso no es acto reclamado, se ejecutó o no en sus términos".

CUARTO.- Inconformes con esa sentencia, el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma



INC.DE INEJ.55/95.

Agraria, en representación del Presidente de la República y del secretario del ramo, por ausencia de éste, interpuso el recurso de revisión. Asimismo la parte tercero perjudicado, representado por el Comisariado Ejidal del ejido "Pueblo Nuevo", hoy "Nuevo Ocuca", del municipio de Trincheras, Sonora, interpuso el recurso de revisión.

De dichos recursos correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el que, por resolución de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en el toca revisión principal 23/94 administrativa, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia dictada por el juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo indirecto 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y otros, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, que se terminó de engrosar el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres.--- SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez Jr. Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda, Francisco Irastorza Lavín Y Heriberto Pesqueira Bárcenas, en contra de las autoridades y por los actos señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el considerando TERCERO de la sentencia que se confirma.--- Notifíquese; anótese en el Libro de Gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad, archívese este expediente."

La referida sentencia se apoya en las siguientes consideraciones conducentes:

"Quinto.- Es infundado el agravio expresado por las autoridades recurrentes.--- En efecto, contrario a lo en él aducido, el juez de Distrito sí dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo en el sentido de que la autoridad judicial deberá recabar de oficio todas las pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados en el artículo 212 del citado ordenamiento legal, pues a fojas ochocientos cuarenta y tres, Tomo I, del Juicio de amparo, obra el auto de seis de agosto de mil novecientos noventa y dos, en que el juez de Distrito requirió a las autoridades de la secretaría de la Reforma Agraria la remisión del expediente relativo al procedimiento de dotación de tierras en que se emitió la resolución presidencial reclamada, el cual se exhibió en copia certificada con el oficio de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, del Director General de Asuntos Jurídicos de la mencionada secretaría (fojas de la novocientos siete -Tomo II- a la dos mil siete -Tomo III- del Juicio de amparo). En consecuencia, no existe el agravio que al respecto se delató.--- El argumento diverso en el sentido de que no se dejó en estado de indefensión a los quejosos, porque la solicitud de dotación que hicieron los campesinos del poblado "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", Municipio de Trincheras, Sonora, fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el treinta de marzo de mil novecientos sesenta, y el día treinta y uno siguiente la autoridad municipal de Trincheras, Sonora, hizo constar que en el tablero de avisos de la presidencia se fijaron las notificaciones correspondientes a los propietarios, representantes, encargados o poseedores de predios rústicos enclavados dentro del radio legal de afectación, y partiendo



del hecho de que los ahora peticionarios de garantías fueron debidamente notificados, en concepto de las autoridades recurrentes resulta ilógico que aduzcan que no se les dio oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, pues si no ejercitaron en tiempo el derecho que tenían para presentar pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera dentro del procedimiento agrario instaurado en su contra, las autoridades recurrentes no fueron responsables de tal omisión; es infundado, pues si bien de las constancias relativas al citado procedimiento que obran en autos, se advierte que los quejosos si comparecieron en dicho procedimiento alegando y ofreciendo pruebas, lo cierto es que en la resolución reclamada, no se tomaron en cuenta dichas probanzas por la autoridad responsable, por lo cual, el juez de Distrito en la sentencia recurrida correctamente consideró que no era obstáculo para ~~ORTE~~ ~~ESTIMAR~~ que se violó la garantía de audiencia en perjuicio de ~~ABACION~~ ~~SALA~~ los accionantes "el hecho de que los quejosos hayan formulado ~~ACUERDOS~~ alegatos y ofrecido pruebas dentro del procedimiento, toda vez que en ningún momento fueron tomadas en cuenta al dictarse la resolución que se impugna, no obstante haber exhibido los documentos con los que pretendían acreditar su propiedad y posesión", omisión que también implica violación a la garantía de legalidad. --- Sexto.- También son infundados los agravios expresados por el Comisariado Ejidal del Ejido "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", del Municipio de Trincheras, Sonora, tercero perjudicado. --- En efecto, sus argumentos en el sentido de que el juez de Distrito debió recabar toda la documentación del trámite administrativo agrario para precisar y proteger los derechos del poblado tercero perjudicado; y que las notificaciones que se hicieron a los accionantes durante dicho trámite, se ajustan a las disposiciones legales vigentes

en su momento; son infundados, porque como ha quedado establecido, el juzgador sí recabó de oficio todas las constancias que integran el expediente en que se emitió la resolución presidencial reclamada; empero la violación de las garantías de audiencia y legalidad en perjuicio de los quejosos, no deriva de una notificación defectuosa, sino del hecho de que en la resolución reclamada, la autoridad responsable no se ocupó de los argumentos y pruebas que hicieron valer los particulares afectados dentro del procedimiento en que se dictó la resolución impugnada. — En cuanto a que resulta incorrecta la apreciación del juez a quo de estimar que por su origen, los inmuebles afectados en la resolución reclamada son inafectables porque forman parte de la colonia "El Cocuca" (sic), sin tomar en consideración que de los títulos de propiedad exhibidos por los quejosos, se advierte que la tenencia de la tierra se viene transmitiendo bajo las reglas del derecho común y no del régimen de las colonias; es infundado, pues independientemente de la forma en que se hayan venido transmitiendo los inmuebles que se defienden en este juicio de garantías, lo cierto es que en autos quedó plenamente acreditado con la prueba pericial topográfica, que dichos terrenos objeto de la litis se encuentran ubicados dentro del distrito de colonización de los Municipios de Altar y Caborca, Sonora, a que se refiere el Decreto publicado en el Diario Oficial el veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, y el diverso Decreto publicado en el Diario Oficial el dieciséis de julio de mil novecientos cincuenta y uno, en el cual se amplió el distrito de colonización en el Estado de Sonora, al Municipio de Trincheras, y por esa razón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6o. de la Ley Federal de Colonización, esos



terrenos que se defienden resultan ser inafectables, pues si bien dicha Ley Federal de Colonización fue derogada por Decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, también lo es que de los artículos 2o y 5o transitorios de dicho Decreto, se desprende que tal derogación no afecta a las colonias ya autorizadas, y en esas condiciones, subsiste la inafectabilidad de los predios objeto de la litis, puesto que ya se encontraban debidamente colonizados en la fecha que se derogó la mencionada Ley Federal de Colonización, según se desprende del oficio del director de la Secretaría de Agricultura de siete de noviembre de mil novecientos cuarenta, en el que comunica que ya se encuentra firmado el contrato-autorización para colonizar el predio "El Ocuca", ubicado en los Municipios de Tubutama y Tepincheras, Sonora, que obra a fojas doscientos cincuenta y cuatro, y de los diversos contratos celebrados por el gobernador constitucional de esa entidad federativa con los propietarios originarios de los predios cuestionados que aparecen agregados a los autos, y por lo tanto, el juez de Distrito no incurrió en la violación delatada, toda vez que cuando los quejosos realizaron la adquisición de los terrenos que defienden eran inafectables por ministerio de la ley."

QUINTO - Recibidos los autos en el juzgado del conocimiento, por acuerdo de treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro, el juez ordenó requerir a las autoridades Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria, delegado de ésta e ingeniero comisionado José Hernández Ramírez, a efecto de que dieran cumplimiento a la sentencia; requerimiento que el juez reiteró mediante proveídos de fechas veintisiete de septiembre y treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; y dieciséis de

marzo de mil novecientos noventa y cinco. En este último proveído la juez ordenó requerir también a la quejosa a fin de que expresara si se había o no cumplido con la sentencia, a lo que el autorizado de esa parte contestó que no se había dado cumplimiento a la ejecutoria.

Posteriormente, mediante oficio 2426 de veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, la juez remitió los autos a la Suprema Corte "por no haber dado cumplimiento al fallo protector las autoridades responsables".

SEXTO.- Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presidente, por acuerdo de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ordenó formar y registrar con el número 55/95, el expediente relativo al incidente de inejecución de sentencia.

Por acuerdo de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se turnaron los autos al ministro ponente.

Mediante oficio 1710, el juez Quinto de Distrito señalado, remitió el diverso oficio 23502 de la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, por el que exhibió copia certificada de la resolución de doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Cuerpo Consultivo Agrario para cumplir con la ejecutoria de amparo a que este expediente se refiere.

Asimismo, mediante oficio 23072 de veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y seis, la Directora General de Asuntos Jurídicos señalada, solicitó que se tuviera al Tribunal Agrario como autoridad sustituta de las señaladas como responsables; y mediante oficio 573240, la Secretaria General del Cuerpo Consultivo Agrario, exhibió copia certificada de la señalada resolución del Cuerpo Consultivo Agrario.



SEPTIMO.- Previo dictamen del ministro ponente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó remitir los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito el ponente, en la que se radicaron los autos y se turnaron al ponente.

El presente asunto fue listado con fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y seis, para verse en sesión de Sala del veintidós siguiente, en la cual el ministro ponente solicitó el retiro del proyecto, lo que fue aprobado por los señores ministros.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105 de la Ley de Amparo, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo de San Ildefonso 7/1995, puntos primero, segundo y tercero, fracción IV, emitido por el Tribunal Pleno el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, toda vez que en el presente asuntos no es el caso de aplicar la sanción prevista en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal.

SEGUNDO.- En el presente asunto esta Sala considera que deben devolverse los autos del juicio de amparo del que deriva este incidente, al juzgado de su origen, a efecto de que se agote nuevamente el procedimiento previsto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se precisan:

Como puede advertirse del resultando primero de esta resolución, en el juicio de amparo los quejosos reclamaron, entre otros actos la resolución presidencial del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el

Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, su ejecución; así como la indebida ejecución de dicha resolución respecto de los predios de dos de los quejosos.

En la sentencia de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal a los quejosos Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, "para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente el procedimiento que culminó con la resolución presidencial reclamada", sin perjuicio de que lo integren nuevamente y se otorgue a los quejosos la garantía de audiencia. Por otra parte, en lo que atañe a los quejosos Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas, el amparo se concedió para el efecto de que las autoridades agrarias responsables, dejaran sin efecto los actos de ejecución que hayan llevado a cabo con motivo de la resolución presidencial, ^{PRIMA} ^{SEGUNDA} ^{TERCERA} ^{ÚNICA} ^{Y ÚLTIMA} exclusivamente por lo que respecta a los quejosos y los bienes que ellos defienden.

Ahora bien, de lo anterior fácilmente se colige que el acto principal, dentro de los reclamados, lo constituye la resolución presidencial especificada del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, tanto por vicios propios como por los de su ejecución.

Ahora bien, en este expediente obra copia de la resolución dictada el doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, por el Cuerpo Consultivo Agrario, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resolución que es del siguiente tenor:

"CUERPO CONSULTIVO AGRARIO.- P R E S E N T E .--
V I S T O para su acuerdo la documentación relativa al



cumplimiento de la ejecutoria del veintiséis de marzo de mil
 novecientos noventa y cuatro, pronunciada por el Segundo
 Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en el Toca de Amparo en
 Revisión número 23/94, relacionado con el Juicio de Garantías
 número 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y
 coagraviados, en su carácter de propietarios de lotes ubicados
 en la Colonia Agrícola "Ocuca", perteneciente al Municipio de
 Trincheras, Estado de Sonora, en el cual resulta tercero
 perjudicado el poblado "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", del
 Municipio y Estado de referencia, de conformidad con los
 siguientes:--- A N T E C E D E N T E S .--- Resolución
 presidencial.- Por resolución presidencial de fecha primero de
 diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el
 Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de mil
 novecientos ochenta y dos, se concedió por concepto de
 Dotación de Tierras al grupo solicitante, una superficie de
 15-20-00 hectáreas, de distintas calidades, a tomarse de la
 siguiente manera: de los lotes número [] con una superficie
 de 55-00-00 hectáreas, propiedad de Graciela Lemas Moreno;
 número [] con superficie de 55-00-00 hectáreas, propiedad de
 Graciela Lemas Moreno; número [] con superficie de 37-20-00
 hectáreas, propiedad de Agustín Rodríguez Hopkins; asimismo,
 los lotes números [] y [] propiedad de Domingo Pesqueira
 B., que cuenta con superficies de 45-00-00 hectáreas, 45-00-00
 hectáreas, y 45-00-00 hectáreas, respectivamente; y los lotes
 identificados por los números [] (A) y [] (A), con superficie
 de 43-50-00 hectáreas, y 43-50-00 hectáreas, sucesivamente,
 presunta propiedad de Margarita Carlos Castañeda y de la
 fracción sin número, baldío, propiedad de la Nación, 37-20-00
 hectáreas, igualmente del predio propiedad de Francisco
 Irastorza Lavín; 608-20-00 hectáreas, y 4,000-00-00 hectáreas,

del predio conocido como los [REDACTED] propiedad de Oscar Pesqueira Bárcenas, ubicados en el Municipio de Trincheras, Estado de Sonora...".--- AUTORIZACION DEL PLANO PROYECTO DE LOCALIZACION.- En sesión celebrada el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, el Cuerpo Consultivo Agrario, autorizó dicho plano de conformidad con el dictamen aprobado en sesión del dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y uno, con una superficie de 5,015-20-00 hectáreas, de terrenos de diversos predios y propietarios.--- EJECUCION DE LA RESOLUCION PRESIDENCIAL.- La referida resolución presidencial fue ejecutada en forma total el catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, entregándose una superficie de 5,015-20-00 hectáreas, según acta de posesión y deslinde levantada en la misma fecha.--- JUICIO DE AMPARO.- Con fecha catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, la señora Graciela Lemas Moreno y Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas y coagraviados, en su carácter de pequeños propietarios, presentaron demanda de amparo ante el entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora (hoy Quinto), la cual quedó registrada con el número 232/82, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan:--- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Los presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de la Reforma Agraria, entonces delegado Agrario en el Estado, ahora Coordinador Agrario e Ingeniero comisionado.--- ACTOS RECLAMADOS.- La desposesión que se pretendió realizar de los predios de la exclusiva propiedad y posesión de los quejosos, ubicados en la Colonia Agrícola "Ocuca" y por ende dentro del Distrito de Colonización Agrícola y Ganadero conocido con ese nombre y ubicado en el Municipio de Trincheras, Sonora; asimismo reclaman los quejosos la afectación ilegal que se



hizo de dichos predios, según resolución presidencial del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, sin tomar en cuenta que se trata de pequeñas propiedades dentro de la zona colonizada de acuerdo con la ley y que por ende se trata de pequeñas propiedades inafectables, reconocidas por acuerdo fechado el catorce de enero de mil novecientos treinta y nueve, que decretó la inafectabilidad permanente de los terrenos de la Colonia "Ocuca" expidiéndose certificados de inafectabilidad, así como el desconocimiento implícito que hicieron de la inafectabilidad de los predios sin ningún procedimiento previo y sin respetar la garantía de audiencia; los quejosos Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas, reclaman la ejecución indebida de dicha resolución presidencial, en virtud de que se pretendió afectar terrenos de agostadero de ~~ORTA~~ exclusiva propiedad y posesión, sin que la resolución lo ~~A LA~~ haya determinado, ya que afecta terrenos totalmente diferentes ~~ACUERDO~~ de otro propietario y sin embargo, en la propia ejecución y en el plano proyectado se les pretendió afectar y desposeer de sus terrenos, independientemente que, por estar comprendidos en el distrito de colonización "Ocuca", dichos predios son inafectables por ley.--- SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.- El juez del conocimiento, por sentencia del nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los señores Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda, Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira, "...para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente el procedimiento que culminó con la resolución presidencial que hoy se reclama, por

lo que a los quejosos se refiere, sin perjuicio de que lo integren nuevamente y en él previas las formalidades legales respectivas se otorgue a los quejosos el derecho de audiencia y puedan desahogar las pruebas y que crean tener derecho, con relación a la propiedad y posesión que tienen sobre los predios objeto de litis...".--- Por lo que se refiere a los actos que reclaman los señores Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas, el juez a quo concedió el amparo y protección "...para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente los actos de ejecución que hayan llevado a cabo con motivo de la mencionada resolución presidencial única y exclusivamente por lo que a los quejosos y a los predios antes citados se refiere...".--- RECURSO DE REVISION.- Inconformes con el fallo anterior, las autoridades responsables y la parte tercero perjudicado interpusieron recurso de revisión ante el Juzgado Quinto de Distrito ^{SEPREM} del Estado, el cual la turnó a los Tribunales Colegiados ^{JUSTICIA} del Quinto Circuito, quien lo remitió al Segundo ^{SECRETARIA} Tribunal Colegiado, el que con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, confirmó la sentencia recurrida en el Toca A. R. 23/94, resolviendo: "...PRIMERO.- Se confirma la sentencia dictada por el juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, en el Juicio de Amparo indirecto 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y otros, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, que se terminó de engrosar el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez Jr., Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda, Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira Bárcenas, en contra de las autoridades y por los actos señalados en el resultando



Primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el considerando Tercero de la sentencia que se confirma...".---

OPINION DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos, al dirigirse al Director General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, emitió su opinión respecto a los alcances de la ejecutoria, con fecha cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, misma que a la letra dice: "... En acatamiento a la ejecutoria citada, las autoridades responsables Presidente de la República, Secretario de la Reforma Agraria, delegado (hoy Coordinador) Agrario en el Estado de Sonora e ingeniero comisionado por la propia Coordinación, en el marco de sus respectivos ámbitos de sus atribuciones, deberán tener por insubsistente la resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, que afectó al poblado "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", Municipio de Trincheras, Estado de Sonora, únicamente en cuanto afecta los predios propiedad de los quejosos Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, sin perjuicio de que se les dé la oportunidad de ser oídos y aporten las pruebas que en derecho correspondan, así como dejar insubsistentes los actos de ejecución que hubiesen aido su consecuencia; asimismo dejar insubsistentes los actos de ejecución que se hayan llevado a cabo de la mencionada resolución presidencial, única y exclusivamente respecto a los quejosos Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas, toda vez que sus predios no son los afectados por la resolución presidencial en cita, por lo que esa Dirección

General a su cargo, por ser un asunto de su competencia, en observancia a lo que dispone el artículo 80 primera parte, de la Ley de Amparo, deberá proveer lo necesario para cumplir con lo anteriormente precisado, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de las Garantías de Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica a que se contraen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...".--- Expuesto lo anterior, este Cuerpo Consultivo Agrario, estima procedente dejar asentadas las siguientes:--- C O N S I D E R A C I O N E S .--- I.- Que este Cuerpo Consultivo Agrario, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, Tercero Transitorio de la Ley Agraria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero del mismo año, 16 fracción VI de la Ley Federal de Reforma Agraria y 80 de la Ley de Amparo.--- II.- Que de antecedentes, se desprende que el poblado "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", del Municipio de Trincheras, Estado de Sonora, fue beneficiado por concepto de dotación, mediante resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, con una superficie de 5,015-20-00 hectáreas, habiendo sido autorizado el Plano Proyecto de Localización por el Cuerpo Consultivo Agrario, el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, con la misma superficie y ejecutado dicho fallo presidencial el catorce de julio del mismo año.--- III.- Que en virtud de lo anterior,



con fecha catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, la señora Graciela Lemas Moreno, Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas y coagraviados, en su carácter de pequeños propietarios, presentaron demanda de amparo ante el juez Segundo de Distrito en el Estado (hoy Quinto), el cual quedó registrado con el número 232/82, en contra de diversas autoridades agrarias y por los actos que quedaron precisados en el capítulo de antecedentes.--- IV.- Que el juez del conocimiento, por sentencia del nueve de julio de mil novecientos noventa y tres, resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los señores Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda, Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira, para el efecto de que "... las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente el procedimiento que culminó en la resolución presidencial que se reclama, por lo que a los quejosos se refiere, sin perjuicio de que lo integren nuevamente y en el cual previas las formalidades legales respectivas se otorgue a los quejosos el derecho de audiencia y puedan desahogar las pruebas a que crean tener derecho con relación a la propiedad y posesión que tienen sobre los predios objeto de litis...".--- Respecto de los actos reclamados por Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas, el amparo y protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que las autoridades responsables, dejen insubsistentes los actos de ejecución que se hayan llevado a cabo con motivo de la mencionada resolución presidencial, única y exclusivamente por lo que a los quejosos y a los predios de su propiedad se refiere.--- V.- Que inconformes con la sentencia anterior, las autoridades responsables y la parte tercero perjudicada, interpusieron Recurso de Revisión, ante

el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el cual con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, confirmó la sentencia recurrida en el Toca A. R. 23/94: "... PRIMERO.- Se confirma la sentencia dictada por el juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, en el Juicio de Amparo indirecto 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y otros, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, que se terminó de engrosar el nueve de julio de mil novecientos noventa y tres. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Pesqueira Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda, Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira Bárcenas, en contra de las autoridades y por los actos señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el considerando Tercero de la sentencia que se confirma...".--- VI.- Que la opinión emitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el cinco de enero de mil novecientos noventa y seis, considera que debe tenerse por insubsistente la resolución presidencial impugnada, así como los actos de ejecución que hubiesen sido su consecuencia, en cuanto afecta a las superficies de terreno propiedad de los quejosos, debiéndose proveer lo necesario para que se les dé la oportunidad de aportar pruebas y formular alegatos que en derecho corresponda, en observancia a lo que dispone el artículo 80, Primera Parte de la Ley de Amparo, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación de las Garantías de Audiencia, Legalidad y Seguridad Jurídica a que se contraen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- VII.- Que en acatamiento a la ejecutoria que nos ocupa y por lo anteriormente expuesto, el Cuerpo Consultivo Agrario en

52



INC. DE INEJ. 55/95.

el ámbito de sus atribuciones debe tener por insubsistente el Plano Proyecto de Localización autorizado por el citado Órgano Colegiado con fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, únicamente por lo que respecta a la afectación de los lotes propiedad de Graciela Lemas Moreno; Agustín Rodríguez; Domingo Pesqueira Bárcenas; Margarita Carlos Castañeda; Francisco Irastorza Lavín y Heriberto Pesqueira Bárcenas.--- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por la fracción VI del artículo 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en correlación con el artículo 80 de la Ley de Amparo, este Cuerpo Consultivo Agrario, emite el siguiente:--- A C U E R D O :--- PRIMERO. En acatamiento a la ejecutoria pronunciada el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, dictada en el Toca al Amparo en Revisión número 23/94, derivado del Juicio de Garantías 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y coagraviados, se tiene por insubsistente el Plano Proyecto de Localización autorizado por el Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, únicamente por lo que respecta a las propiedades de los quejosos amparados que se precisan en el considerando VII del presente acuerdo, correspondiente a la resolución presidencial de fecha primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, que concedió por concepto de dotación al poblado "Pueblo Nuevo" hoy "Nuevo Ocuca", del Municipio de Trincheras, Estado de Sonora, la superficie de 5,015-20-00-00 hectáreas.--- SEGUNDO.- Hágase del conocimiento del presente asunto al director General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, para que

provea lo necesario a fin de que se lleve a cabo la correcta localización de las 4,000-00-00 hectáreas, que la resolución presidencial de primero de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, manda afectar del predio [REDACTED] considerado en la propia resolución, como propiedad de Oscar Pesqueira Bárcenas, a virtud del respeto a la propiedad de los quejosos amparados, Domingo y Heriberto Pesqueira Bárcenas.---

TERCERO.- Notifíquese por conducto de la secretaria de actas y acuerdos al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, al director General de Asuntos Jurídicos, al Coordinador Agrario en la Entidad, al poblado tercero perjudicado y a los promoventes del amparo."

Como puede advertirse, en la resolución del Cuerpo Consultivo Agrario se dejó insubsistente el plano proyecto de localización de la superficie afectada por el decreto dotatorio de tierras.

Sin embargo, dicho acto no es bastante para [REDACTED] cumplida la ejecutoria de amparo.

Según se aprecia de la transcripción de la sentencia (fojas once a dieciséis de la presente resolución), la protección de la justicia federal se otorgó a los quejosos Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, en contra de la resolución presidencial reclamada, para "el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistente el procedimiento que culminó con la resolución presidencial que hoy se reclama, por lo que a los quejosos se refiere, sin perjuicio de que lo integren nuevamente y en el cual previas las formalidades legales respectivas se otorgue a los quejosos el derecho de audiencia y puedan desahogar las



FORMA 55/95

pruebas a que crean tener derecho con relación a la propiedad y posesión que tienen sobre los predios objeto de litis".

Asimismo, por lo que respecta a los quejosos Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas, la protección de la justicia federal en contra de la ejecución de la resolución presidencial reclamada, se concedió: "para el efecto de que las autoridades agrarias responsables dejen insubsistentes los actos de ejecución que hayan llevado a cabo con motivo de la mencionada resolución presidencial única y exclusivamente por lo que a los quejosos y a los predios antes citados se refiere".

En tal virtud, el cumplimiento de la sentencia de amparo supone la realización de actos diversos, a saber: de un lado, la insubsistencia de la resolución presidencial combatida en lo que atañe a los quejosos cuyos predios fueron materia de ella; de otro, la insubsistencia de los actos de ejecución de la resolución presidencial, por lo que respecta a los quejosos en cuyos predios se ejecutó indebidamente ésta; y en relación con todos los quejosos, la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, por efecto de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, por cuanto al primero de los efectos indicados, el cumplimiento de la sentencia de amparo precisa de la previa declaración de insubsistencia de la resolución presidencial, como condición para que, en su caso, se otorgue a los quejosos Graciela Lemas Moreno, Agustín Rodríguez, Domingo Bárcenas, Margarita Carlos Castañeda y Francisco Irastorza Lavín, la garantía de audiencia.

El dictado de la declaratoria de insubsistencia respectiva, por virtud de la reforma al artículo 27 constitucional en el año de mil novecientos noventa y dos,

corresponde en la actualidad al Tribunal Agrario y, por ello, es necesario requerir a éste dentro del procedimiento para cumplir con la ejecutoria de amparo.

En efecto, los Tribunales Agrarios fueron creados por reforma al artículo 27 de la Constitución Federal, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos.

En la adición realizada a la fracción XIX, del artículo 27 constitucional, quedó como segundo párrafo el siguiente: "Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente".

Los artículos transitorios del mencionado decreto de reformas, establecieron:

"ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

"ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo Decreto".



"ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto."

"Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior."

"Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva".

Ahora bien, en fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Agraria, que en sus artículos 1o., 163 y primero a tercero transitorios, establece:

"ARTICULO 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República".

"ARTICULO 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley".

"ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

"ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Se derogan la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Crédito Rural, la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías y la Ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, así como todas las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley.- En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley".

SUPREMA
SEGUNDA
SECRETARIA

"ARTICULO TERCERO TRANSITORIO.- La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales."

"Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior, cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,



publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992."

"Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán a éstos por la Comisión Agraria o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que aquéllos entren en funciones."

"La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada substanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda".

En misma fecha, veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que en sus artículos 10., 20., 18, así como en los transitorios primero y cuarto, disponen:

ORTE DE
LA NACIÓN
SALA
ACUERDOS

"ARTICULO 10.- Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional".

"ARTICULO 20.- Los tribunales agrarios se componen de:
I.- El Tribunal Superior Agrario, y II.- Los Tribunales unitarios agrarios".

"ARTICULO 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

"Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

"I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

"II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

"III. Del reconocimiento del régimen comunal;

"IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

"VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o vecindados entre sí, así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población:

SUPLENTE
JEFES DE
SECRETARIA

"VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

"VIII. De las nulidades prevista en las fracciones VIII y IX de artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

"IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, vecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaces e inmediatamente subsanadas;



"X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria;

"XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;

"XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;

"XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables, y

"XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes".

"ARTICULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

DE ACUERDOS.

"ARTICULO CUARTO.- En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que se encuentren actualmente en trámite, pendientes de resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución y se turnarán los expedientes debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que, a su vez:

"I. Turne a los tribunales unitarios para su resolución, según su competencia territorial, los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales,

o,

"II. Resuelva los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, así como creación de nuevos centros de población.

"Si a juicio del Tribunal Superior o de los tribunales unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio tribunal".

De los preceptos relacionados se desprende que en virtud de las reformas al artículo 27 de la Constitución Federal, de la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, la vigencia de la nueva Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo del que deriva el presente incidente, compete en el aspecto examinado, a los indicados Tribunales, pues a ellos corresponde dictar la resolución definitiva, entre otras, en materia de dotación de tierras y, consecuentemente, ^{SECRETARIA} ~~son los~~ que cuentan con competencia para resolver ^{RECUN} ~~sobre la~~ insubsistencia del procedimiento que culminó con la resolución presidencial reclamada, para dar cumplimiento a una parte de la ejecutoria de amparo.

Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y siete, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, la que señala:

"TRIBUNALES AGRARIOS. SON AUTORIDADES SUBSTITUTAS DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO RELACIONADAS CON ACUERDOS DOTATORIOS DE TIERRAS.- El Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación mencionado, deroga la fracción XIII del artículo 27



constitucional, que establecía la facultad del Presidente de la República, como suprema autoridad agraria, para dictar resolución en los expedientes relativos a las solicitudes de restitución o dotación de tierras o aguas; asimismo, adiciona la fracción XIX del propio precepto constitucional para instituir tribunales encargados de la administración de justicia agraria, y dispone en su artículo tercero transitorio que los asuntos en trámite al entrar en vigor el Decreto, relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, continuarán desahogándose por las autoridades agrarias competentes, y que en aquellos en los que no se haya dictado resolución al entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su Ley Orgánica, los resuelvan en definitiva. Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone en su artículo cuarto transitorio, que los asuntos anteriores se turnarán al Tribunal Superior Agrario para que a su vez los turne a los Tribunales Unitarios Agrarios, según su competencia territorial, para que resuelvan los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, o para que resuelvan los asuntos sobre ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población. Por tanto, a partir de la entrada en funciones del Tribunal Superior Agrario, a éste compete legalmente dejar sin efectos, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, los acuerdos presidenciales dotatorios de tierras a los ejidos, pues el dictado de tal ejecutoria necesariamente implica la no existencia de la resolución definitiva en los expedientes dotatorios respectivos".

Ahora bien, la materia de un incidente de inejecución de sentencia, la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables, cuando las mismas han sido requeridas en los términos señalados por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, a fin de aplicar la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, ello sin perjuicio de que se haga cumplir la ejecutoria conforme lo dispuesto por los artículos 111 y 112 de la propia ley. Por otra parte, según lo dispone el artículo 114 de la mencionada ley, no se puede archivar ningún juicio de amparo, sin que quede enteramente cumplida la sentencia concesoria del amparo, salvo que ya no exista materia para su ejecución. Por lo anterior, cuando la autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por virtud de reformas constitucionales y legales queda impedida para cumplimentar una sentencia, por ya no corresponder al ámbito de su competencia, sino a la esfera de competencia de otra autoridad que no tuvo el carácter de responsable en el juicio de garantías, no se está en posibilidad de determinar en el incidente relativo sobre el incumplimiento a la ejecutoria y la procedencia de la sanción señalada en el precepto constitucional antes citado, dado que la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo ya no tiene responsabilidad alguna y la autoridad que no intervino con el carácter de responsable y a quien compete dar cumplimiento a la ejecutoria, al no haber intervenido en juicio tampoco puede considerársele responsable del incumplimiento.

Es aplicable en la especie lo decidido por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XXVII/93, aprobada en sesión privada del tres de mayo



de mil novecientos noventa y tres, que dice: "INEJECUCION DE SENTENCIA, CUANDO EXISTA AUTORIDAD SUBSTITUTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA, DEBE AGOTARSE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 104, 105 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE AMPARO.- La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el estudio y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, cuando las mismas ^{ya} han sido requeridas en los términos establecidos por los artículos 104 y 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, a fin de aplicar la sanción prevista por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, ello sin perjuicio de ^{que} se haga cumplir la Ejecutoria de amparo conforme a lo preceptuado por los artículos 111 y 112 del ordenamiento secundario citado, y de ^{que} el artículo 113 del propio cuerpo legal exige que no se archive ningún juicio de amparo hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que conceda la protección constitucional al agraviado, salvo que ^{apareciere} que ya no hay materia para la ejecución. Por tanto, cuando la autoridad responsable en un juicio de garantías en que se concedió la protección constitucional al quejoso, en virtud de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria relativa, queda legalmente impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por no corresponder ya al ámbito de su competencia constitucional y legal la ejecución de actos de autoridad necesarios para el cumplimiento de tal ejecutoria, sino al ámbito de competencia de otra autoridad que no tuvo el carácter de responsable en el juicio de amparo, no se está en posibilidad de determinar en el incidente de inejecución de sentencia relativo sobre el incumplimiento a la ejecutoria de amparo y la procedencia de

la sanción prevista por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en virtud de que la autoridad que intervino como responsable en el juicio y respecto de la cual se concedió el amparo, al estar impedida constitucional y legalmente para cumplimentar la ejecutoria de garantías, ya no tiene responsabilidad alguna, y por lo que toca a la autoridad a quien compete con motivo de las reformas constitucionales y legales el cumplimiento relativo, al no haber intervenido en el juicio, ni haber sido notificada de la existencia de la ejecutoria y requerida, en los términos previstos por la Ley de Amparo, para que le dé cumplimiento, tampoco puede resultar responsable de su incumplimiento. En tales condiciones, debe agotarse el procedimiento previsto por los artículos 104, 105 y demás relativos de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad que con motivo de las reformas compete el cumplimiento de la ejecutoria".

SUPRE
JUSTICI
38G
SECRETAR

Por las razones señaladas, procede, como se indicó, devolver los autos del juicio de amparo al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, a efecto de que proceda a requerir del Tribunal Superior Agrario, como autoridad substituta del Presidente de la República, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el aspecto señalado.

Por otra parte, en lo relativo a los restantes actos necesarios para dar cumplimiento a la ejecutoria, esto es, a la insubsistencia de los actos de ejecución de la resolución presidencial, por lo que respecta a los quejosos Domingo Pesqueira Bárcenas y Heriberto Pesqueira Bárcenas, y, respecto de todos los quejosos, por cuanto a la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación,



es necesario determinar a qué autoridad corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Como se indicó anteriormente, entre las constancias de autos obra copia certificada de la resolución que pronunció el Cuerpo Consultivo Agrario, el doce de marzo de mil novecientos noventa y seis, a virtud de la cual se tuvo por insubsistente el plano proyecto de localización, autorizado por el señalado órgano colegiado el treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, que concedió por concepto de dotación al poblado "Pueblo Nuevo", hoy "Nuevo Ocuca", del municipio de Trincheras, Estado de Sonora, una superficie de terreno.



En el punto resolutivo segundo de esa resolución, se ordenó hacerla del conocimiento del Director General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, "para que provea lo necesario a fin de que se lleve a cabo la correcta localización de las cuatro mil hectáreas", que se ordenó afectar del predio [REDACTED], propiedad de Oscar Pesqueira Bárcenas.

Ahora bien, por cuanto a dicho acto y, en relación con todos los quejosos, el cumplimiento de la ejecutoria según lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, requiere la restitución de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación y, consecuentemente, para los quejosos, en la posesión de sus bienes, en virtud de que la resolución presidencial fue ejecutada el catorce de julio de mil novecientos ochenta y dos, entregándose una superficie de 5,015-20-00 hectáreas.

Establecido lo anterior conviene transcribir nuevamente el contenido de los artículos tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 27 constitucional, y 18 de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios en los que se estableció:

"ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto."

"Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior."

SUPREMA
JUSTICIA
SEGUN

"Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva".

"ARTICULO 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

"Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

"I.- De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;



INC. DE INEJ. 55/95.

"II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

"III. Del reconocimiento del régimen comunal;

"IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

"VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, poseionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población:

CORTE DE "VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

DE LA SALA DE ACUERDOS. "VIII. De las nulidades prevista en las fracciones VIII y IX de artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

"IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

"X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria;

"XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;

"XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;

"XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables, y

"XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes".

Como puede advertirse, el primer párrafo de la norma transitoria transcrita regula la hipótesis de los asuntos en trámite, a la fecha de entrada en vigor del decreto, indicándose que las autoridades que se precisan continuarán desahogándolos, de conformidad con las disposiciones legales que los reglamenten y que "estén vigentes al momento de ^{entrar} ~~entrar~~ en vigor" el decreto.

El segundo párrafo del precepto transitorio se refiere también a los asuntos en trámite y dispone que en aquéllos en los que no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que, conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.

Por su parte, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los tribunales agrarios, señala la competencia de estos Tribunales, respecto de las controversias que se planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, no



encontrándose dentro de las atribuciones que se le señalan, la de instaurar el procedimiento de dotación de tierras.

El asunto de que derivó este incidente se encuentra regido por los dos primeros párrafos de la norma señalada, pues los actos reclamados, como se ha visto, derivan de una resolución presidencial emitida en un procedimiento de dotación de tierras.

Como consecuencia de la concesión del amparo a virtud de que debe declararse insubsistente el procedimiento que culminó con la referida resolución, respecto de los cuatro quejosos antes mencionados, ello implica que el asunto debe considerarse como uno en "trámite" regido, por ende, por los dos primeros párrafos del artículo tercero transitorio indicado.

En ese sentido resulta pertinente reproducir de nuevo lo dispuesto por los artículos segundo y tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, los que respectivamente señalaban:

"ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO.- Se derogan la Ley Federal de Reforma Agraria, la Ley General de Crédito Rural, la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías y la Ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino, así como todas las disposiciones que se opongan a las previstas en la presente ley.- En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley".

"ARTICULO TERCERO TRANSITORIO.- La Ley Federal de Reforma Agraria que se deroga se seguirá aplicando respecto de los

asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales."

"Por lo que hace a los asuntos relativos a las materias mencionadas en el párrafo anterior, cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, así como los asuntos relativos a dichas materias en los que en lo futuro se dicten, se estará a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992."

"Los demás asuntos que corresponda conocer a los tribunales agrarios, se turnarán a éstos por la Comisión Agraria o el Cuerpo Consultivo Agrario, según corresponda, en el estado en que se encuentren, una vez que aquéllos entren en funciones."

"La autoridad agraria deberá prestar a los tribunales la colaboración que le soliciten para la adecuada substanciación de los expedientes, a fin de que se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda".

Asimismo, debe tenerse en cuenta el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, el que señala:

"ARTICULO CUARTO.- En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,



67

publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que se encuentren actualmente en trámite, pendientes de resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución y se turnarán los expedientes debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario una vez que éste entre en funciones, para que, a su vez:

"I. Turne a los tribunales unitarios para su resolución, según su competencia territorial, los asuntos relativos a restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales,



O, "II. Resuelva los asuntos relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, así como creación de nuevos centros de población.

CORTE DE "Si a juicio del Tribunal Superior o de los tribunales unitarios, en los expedientes que reciban no se ha observado la garantía de audiencia, se subsanará esta deficiencia ante el propio tribunal".

Finalmente, es necesario también considerar lo dispuesto por los artículos 8° y 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de mil novecientos noventa y cinco, los que indican:

"Artículo 8°.- El Cuerpo Consultivo Agrario tiene las atribuciones que en forma expresa le confieren los artículos Tercero Transitorio del Decreto que reforma al artículo 27 Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos y Tercero Transitorio de la Ley Agraria. Su operación y funcionamiento se regirá por el reglamento que al efecto se expida"

"Artículo 13.- La Dirección General de Procedimientos para la conclusión del Rezago Agrario participará en la integración de los expedientes instaurados durante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, de conformidad con los artículos Tercero Transitorio del Decreto que reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, y de la Ley Agraria, y tendrá sobre los mismos las siguientes atribuciones:

"I.- Revisar que los expedientes referentes a dotación, ampliación, restitución de tierras, bosques y aguas, nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales estén debidamente integrados y turnarlos para dictamen al Cuerpo Consultivo Agrario;

"II.- Continuar los procedimientos relativos a la nulidad de los acuerdos y cancelación de los certificados de inafectabilidad;

"III.- Sustanciar los expedientes en trámite de restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales y de conflictos por límites de bienes comunales y emitir la opinión correspondiente;

"IV.- Revisar la integración de los expedientes de división, fusión y permuta de terrenos ejidales y remitirlos para su dictamen al Cuerpo Consultivo Agrario;

"V.- Conocer los asuntos relacionados con la adquisición de aguas, y coordinar la atención de los mismos con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;

"VI.- Continuar los procedimientos de nulidad de fraccionamientos de propiedades afectables por actos de simulación, y remitirlos para su dictamen al Cuerpo Consultivo Agrario;

63



INC. DE INEJ. 55/95.

"VII.- Solicitar al Registro Agrario Nacional la ejecución de los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos que se requieran para la integración de los expedientes relativos a los asuntos materia de su competencia; el que los realizará por sí o a través de terceros, de conformidad con la normatividad y legislación aplicable;

"VIII.- Vigilar que la ejecución de los servicios técnicos, topográficos y cartográficos, que se requieran para la integración de los expedientes que se someterán a la autorización del Cuerpo Consultivo Agrario, se apeguen a la normatividad y legislación correspondiente;



"IX.- Solicitar al Registro Agrario Nacional la elaboración de los planos definitivos de las distintas acciones agrarias, a fin de someterlos a la consideración del Secretario;

CORTE DE LA NACIÓN A SALA DE ACUERDOS.
"X.- Observar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la ejecución de las resoluciones presidenciales de las distintas acciones agrarias y sustanciar las inconformidades derivadas de las mismas;

"XI.- Llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, todas las acciones que estuvieren pendientes de ejecutar, relacionadas con el cumplimiento de las resoluciones presidenciales emitidas en los expedientes de dotación, ampliación, creación de nuevos centros de población, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, y de conflictos por límites de bienes comunales, y

"XII.- Las demás que determine el Secretario o le confieran otras disposiciones legales".

De las normas transcritas se sigue que compete al Tribunal Agrario la declaratoria de insubsistencia del procedimiento que culminó con la resolución presidencial

reclamada, en relación con los cuatro quejosos antes mencionados y, en términos de los artículos 18 y cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, tomar las medidas necesarias para que, en su caso, se otorgue a los afectados la garantía de audiencia; y que corresponde al Cuerpo Consultivo Agrario y a la Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, de acuerdo con las normas reglamentarias preinsertas, en la órbita de sus respectivas atribuciones, dictar las medidas necesarias, a fin de que los quejosos sean restituidos en el goce de la garantía individual violada por lo que atañe a la posesión de sus predios.

En ese sentido, no basta entonces que el Cuerpo Consultivo Agrario, en la resolución antes citada, haya dejado sin efectos el plano proyecto de localización autorizado en sesión de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y dos, y dispuesto la correcta localización de la superficie afectada, porque, independientemente de que con ello no se ^{suplimenta} ~~se da~~ exacto cumplimiento a la ejecutoria, debe tenerse en cuenta, ^{además} ~~que se precisa~~, en primer lugar, de la resolución definitiva que emita el Tribunal Agrario en el trámite del procedimiento de dotación a fin de que, con base en ésta, pueda localizarse adecuadamente la superficie afectada, dentro del marco de las atribuciones de las autoridades administrativas.

Por ello, y con base también en las consideraciones externadas al examinar el cumplimiento de la ejecutoria por parte del Tribunal Agrario, deben devolverse los autos al juez de Distrito a efecto de que proceda a requerir también del Cuerpo Consultivo Agrario y de la citada Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, el cumplimiento de la ejecutoria en la esfera de sus respectivas



- 57 -

INC. DE INEJ. 55/95.

atribuciones, tomando las medidas necesarias a efecto de restituir a los quejosos en el goce de la garantía individual infringida.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

UNICO.- Devuélvānse los autos del juicio de amparo 232/82, promovido por Graciela Lemas Moreno y otros, al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, para el efecto precisado en el último considerando de esta resolución.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.



CORTE P.

LA NACIÓN ponente el cuarto de los señores ministros antes mencionados.

A SAL.

DE ACUERDO.

Firman el presidente de la Sala y el ministro ponente con la secretaria de Acuerdos de la Sala, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.

PONENTE:

MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION.
SEGUNDA SALA
SECRETARIA DE ACUERDOS.

SECRETARIA DE ACUERDOS:

LIC. LETICIA G. ORTIZ GONZALEZ.

El secretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace constar que, en cumplimiento al artículo 191 de la Ley de Amparo, al terminar los labores de este día, se fijó, en el lugar destinado para las notificaciones, una lista de los asuntos tratados en la audiencia de esta Sala celebrada el día de hoy, en la que se incluye este expediente (o tomos) F. I. de J. C. 55/95

México, D. F., 10-Enero-97

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SALA:

ESTE ASUNTO PASO A LA ACTUARIA EN
13 FEB. 1997

EN **14 FEB. 1997** Y POR MEDIO DE LISTA SE
NOTIFICO LA RESOLUCION ANTERIOR A LAS PARTES Y AL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. CONSTE. *Del*

14.
13.
C. J. N.
FARIA C.